

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO: 1040
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2021-00093-00
MEDIO DE CONTROL: CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: LUIS ORLANDO ALVAREZ CONTRERAS
CONVOCADA: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ASUNTO: Repone improbación y aprueba acuerdo conciliatorio

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Surtido el traslado de que trata el artículo 319 del CGP, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la entidad convocada contra el auto interlocutorio No. 401 del 21 de julio de 2021, notificado por estado el 22 del mismo mes y año, mediante el cual se improbió el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes el 26 de marzo de 2021 ante la Procuraduría Ochenta y Dos Judicial I para Asuntos Administrativo de Bogotá.

La parte recurrente aseveró que el acuerdo consiste en la actualización de las partidas computables de la asignación mensual de retiro de un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, denominadas subsidio de alimentación y duodécimas partes de las primas de servicios, vacaciones y navidad, en aplicación del principio de oscilación, y adujo que aunque no desconoce los presupuestos requeridos para que un acuerdo conciliatorio sea aprobado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en el auto censurado se indicó que al no tener las pruebas idóneas no se refrendaría la fórmula de arreglo, lo cierto es que *"en el expediente digital que obra en el despacho de la Procuradora 82 Judicial I para Asuntos Administrativos se encuentran las pruebas que permiten avalar el acuerdo extrajudicial, pues se encuentra el escrito de la solicitud de conciliación, subsanación al escrito de solicitud de conciliación, pruebas documentales correspondientes (poder, copia derecho de petición, acto administrativo reconocimiento de la prestación, hoja de servicios, constancia última unidad y ultimo desprendible de pago) y los documentos aportados por la suscrita (poder y sus respectivos anexos, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional, certificación emitida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y liquidación de los valores correspondientes al caso concreto), situación que se demuestra con la sábana de correos electrónicos remitidos al correo electrónico lacastillov@procuraduria.gov.co, dispuesto por el Agente del Ministerio Público para la recepción de documentación relacionada con el trámite conciliatorio iniciado por el señor IT (r) Luis Orlando Álvarez Contreras mediante apoderado con antelación a la celebración de la audiencia"*.

Agregó que, a pesar del requerimiento hecho por este juzgado a la procuraduría que atendió la audiencia de conciliación extrajudicial, tal requisitoria se hubiera podido hacer a las partes para que allegaran las pruebas faltantes; no obstante, en aras de lograr la aprobación del acuerdo conciliatorio aportó copia de la liquidación allegada a esa procuraduría y al correo electrónico aportado por el convocante, y por tal razón solicitó que se revoque el auto del 21 de julio de 2021 y, en su lugar, se le imparta aprobación del acuerdo prejudicial o, en su defecto, que se conceda el recurso de apelación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede

contra todos los autos; mientras que los artículos 243 y 244 *ibídem* señalan que contra el auto que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales procede el recurso de apelación y éste podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición.

Reexaminada la actuación prejudicial en cuestión, se acogerá el reparo hecho por la parte convocada y, por ende, se validarán las pruebas allegadas que se echaron de menos en el proveído impugnado, precisando que en el auto No. 401 del 21 de julio de 2021, al ejercer el control de legalidad del acuerdo extrajudicial no se encontraron los soportes en los cuales se sustentara la obligación clara, expresa y exigible, y a pesar de ello se requirió a la autoridad conciliadora para que aportara los anexos correspondientes, más cuando en el acta suscrita el 26 de marzo de 2021 sólo se transcribieron los parámetros generales que fija el Comité de Conciliación de la entidad convocada para concertar ese tipo de asuntos.

Entonces, contrario a lo argumentado por la apoderada de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al juez no le es dable decretar pruebas para suplir insuficiencias probatorias, pues dicha carga le incumbe a los interesados, por lo que la iniciativa de haber requerido a la mandataria para que arrimara los soportes faltantes sería, en principio, inviable, pues tal facultad está reservada por la ley sólo a la entidad conciliadora; no obstante, haciendo prevalecer el derecho sustancial y teniendo en cuenta que se logró una amigable composición entre las partes, se optó por ese correctivo con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración y privilegiar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y como tal deficiencia fue subsanada, lo conducente es definir a continuación si se le imparte aprobación o no al referido acuerdo conciliatorio extrajudicial.

I. ANTECEDENTES

A petición del señor Luis Orlando Álvarez Contreras, quien actúa por conducto de apoderado especial, y previo agotamiento del trámite de rigor, la Procuradora Ochenta y Dos Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá llevó a cabo el 26 de marzo de 2021 audiencia de conciliación extrajudicial, trámite en el cual el convocante formuló las siguientes pretensiones:

"Señor procurador, pretendo con la presente solicitud que se pongan en acción, las alternativas de solución de conflictos, tendientes a concretar la Conciliación Extrajudicial entre las partes, teniendo en cuenta los aspectos facticos y jurídicos que implica esta controversia de naturaleza contractual entre mi mandante y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y así evitar poner en ejercicio la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que ordena nuestro ordenamiento jurídico. 2- De llegar a un acuerdo conciliatorio, sean remitidas las actas que contengan el acuerdo logrado por las partes, al Juez o Corporación que sea competente para conocer del caso, a fin de ser aprobado o improbadó' 3- Que se me reconozca la personería jurídica correspondiente.

a) Prima de servicio: Decreto 1091 del 27 de junio de 1995, artículo 13, literal a: Asignación básica mensual + prima de retorno a la experiencia + subsidio de alimentación. Luego de realizar el anterior procedimiento matemático, del total se calcula una duodécima parte, de acuerdo con lo establecido en el decreto 4433 del 31 de diciembre del año 2004, artículo 23.2, valor final que debe reflejarse como factor computable en la asignación de retiro de mi poderdante. Conforme a lo señalado en el cuadro anexado en la solicitud.

b) Prima de Vacaciones: Decreto 1091 del 27 de junio de 1995, artículo 13, literal b: Asignación básica mensual + prima de retorno a la experiencia + subsidio de alimentación + una doceava parte de la prima de servicio. Luego de realizar el anterior procedimiento matemático, del total se calcula una duodécima parte de acuerdo con lo establecido en el decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, artículo 23.2, valor final que debe reflejarse como factor computable en la asignación de retiro de mi poderdante. Para graficar con exactitud lo señalado, conforme a lo señalado en el cuadro anexado en la solicitud.

c) Prima de Navidad: Decreto 1091 del 27 de junio de 1995, artículo 13, literal c. Asignación básica mensual + prima de retorno a la experiencia + prima del nivel ejecutivo + subsidio de alimentación + una doceava parte de la prima de servicio + una doceava parte de la prima de vacaciones. Luego de realizar el anterior procedimiento matemático, del total se calcula una duodécima parte de acuerdo con lo establecido en el decreto 4433 del 31 de diciembre de

2004, artículo 23.2, valor final que debe reflejarse como factor computable en la asignación de retiro de mi poderdante. Para graficar con exactitud lo señalado, respetuosamente se describe el proceso de la siguiente forma verificada en el cuadro anexo solicitud".

Por su parte, la mandataria de la parte convocada presentó fórmula conciliatoria en los siguientes términos:

"Que según certificación del Comité de Conciliación mediante acta 25 del 11 de marzo de 2021 decidió proponer la siguiente fórmula conciliatoria:

La conciliación se rige bajo los siguientes parámetros: 1. Se reconocerá el 100% del capital. 2. Se conciliará el 75% de la indexación 3. Las sumas dinerarias se cancelarán dentro de los 6 meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la Entidad, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses. 4. Se aplicará la prescripción trienal contemplada en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, norma prestacional vigente al momento de la adquisición del derecho a gozar de la prestación, es decir, la propuesta económica de conciliación se realizará desde el 02 de marzo de 2017, en razón a la petición radicada en la Entidad el 02 de marzo de 2020. Por último en aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015 por tratarse el presente asunto de los efectos económicos del acto administrativo identificado bajo el ID 558973 del 20 de abril de 2020 expedido por la Entidad convocada, en anuencia con lo previsto en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el acuerdo al que llegarían las partes es TOTAL lo que produce o conlleva a la revocatoria total del citado acto administrativo. En los anteriores términos al comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto le asiste ánimo conciliatorio".

Finalmente, aceptada la propuesta por la parte convocante, el acuerdo fue avalado por la procuradora judicial que atendió el caso, en los siguientes términos:

"La procuradora judicial, en atención a la manifestación de ánimo entre las partes, presenta concepto favorable a la presente audiencia de conciliación y da por surtido el trámite conciliatorio extrajudicial; en consecuencia, ordena la expedición de los respectivos documentos y el envío al juez correspondiente".

II. CONSIDERACIONES

El Decreto 1716 de 2009, por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001, en su artículo 2, prevé:

"Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado".

Como en este tipo de controversias está inmerso el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio requiere el cumplimiento de unas exigencias especiales, que deben tenerse en cuenta por el juez en el momento de decidir sobre su aprobación, las cuales fueron compiladas por el Consejo de Estado, así:

1. Que las partes estén debidamente representadas y que sus voceros tengan capacidad para conciliar.
2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por los litigantes.

3. Que la acción no haya caducado.

4. Que existan pruebas necesarias para soportar la conciliación, es decir, que respalden lo reconocido patrimonialmente en el acuerdo.

5. Que lo acordado no sea violatorio de la ley ni resulte lesivo para el patrimonio público.

Pues bien, afianzado en los presupuestos arriba enlistados, el despacho entrará a analizar si se cumplen o no. Veamos:

1. Representación de las partes litigantes y capacidad de sus representantes para conciliar

El convocante, señor Luis Orlando Álvarez Contreras, es una persona natural con capacidad legal y está debidamente asistida por su abogado de confianza, al cual le otorgó expresamente la facultad de conciliar (fl. 2 del archivo "02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf").

La convocada, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, es una persona jurídica con capacidad legal y a través de su representante judicial y extrajudicial facultó a una profesional del derecho para que la representara, con la potestad de conciliar (fl. 54 del archivo "02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf").

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles por las partes

Si bien en este caso está en juego un derecho laboral mínimo irrenunciable, como es la seguridad social en pensiones, la conciliación es factible, en tanto el acuerdo no menoscabe los derechos ciertos e indiscutibles y el trabajador no renuncie a las prerrogativas laborales mínimas ni a la seguridad social.

La pretensión del convocante está dirigida a obtener la cancelación de las diferencias insolutas que resultarían de comparar el valor recibido a título de asignación mensual de retiro y el que debió percibir con el reajuste reclamado, esto es, la re-liquidación de dicha prestación económica con el incremento anual de las partidas computables (el subsidio de alimentación y las doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones) en aplicación del principio de oscilación, y el pago de la indexación de tales diferencias.

Así las cosas, es claro que en el aludido acuerdo no está en discusión ni es objeto de concertación la asignación mensual de retiro en sí misma ni su reajuste, que sí son prerrogativas irrenunciables, por involucrar el mínimo vital y móvil del titular y su núcleo familiar y, por tanto, no es negociable; por lo contrario, lo que se concilia parcialmente es la indexación de las diferencias que resulten de la re-liquidación, es decir, un derecho económico susceptible de disposición por parte del beneficiario.

Nótese, que la entidad convocada se comprometió a pagarle al convocante el cien por ciento (100%) del reajuste pretendido (capital) y el setenta y cinco por ciento (75%) de la indexación, esta última susceptible de transacción, en la medida en que sólo es un mecanismo para compensar la depreciación monetaria de la acreencia y, por tanto, no hace parte de los derechos mínimos laborales ni renunciaría a la seguridad social.

3. Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

No se configura este fenómeno, si se advierte que el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA prevé que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser promovido en cualquier tiempo cuando se dirige contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, de modo que teniendo el reajuste impetrado esa connotación jurídica, es manifiesta la inoperancia de la caducidad de dicha acción frente al acto administrativo que eventualmente llegare a acusarse.

4. El acuerdo conciliatorio debe estar soportado en las pruebas necesarias que respalden la obligación dineraria reconocida

Para este efecto, se acopiaron las siguientes probanzas:

a) Copia de la Resolución No. 0202 del 13 de mayo de 2008, por medio de la cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a favor del Intendente Luis Orlando Álvarez Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.013.308, efectiva a partir del 13 de mayo de 2008 (fls. 28 y 29 "*02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf*").

b) Oficio No. 558973 emitido el 20 de abril de 2020, mediante el cual la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Retiro de la Policía Nacional dio respuesta a la petición radicada por el convocante el 2 de marzo de 2020, informándole que no sería atendida favorablemente su solicitud, por lo que quedaría en libertad de acudir al mecanismo de conciliación extrajudicial (fls. 19 a 24 "*02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf*").

c) Copia de la hoja de servicio No. 8013308, en la cual se certifica que el señor Luis Orlando Álvarez Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.013.308, prestó sus servicios en la Policía Nacional desde el 8 de mayo de 1978 hasta el 13 de mayo de 2008, para un total de 25 años, 7 meses y 16 días de servicio. También constan los últimos haberes devengados y las partidas computables para la asignación mensual de retiro (fl. 30 "*02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf*").

d) Copia del reporte histórico de bases y partidas de la asignación mensual de retiro del Intendente (r) Luis Orlando Álvarez Contreras, correspondientes a los años 2008 a 2020 (fls. 34 a 31 "*02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf*").

e) Oficio No. 640894 emitido el 18 de marzo de 2021 por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el cual se fijaron los términos para resolver lo relativo al reajuste de la asignación mensual de retiro del convocante, de acuerdo con el Acta 25 del 11 de marzo de 2021 (fls. 55 y 56 "*02.SoporteTramiteProcuraduria.pdf*").

f) Pre-liquidación del reajuste de la asignación mensual de retiro que le correspondería al señor Luis Orlando Álvarez Contreras, suscrita por el Grupo de Negocios Judiciales de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, aportada por la apoderada de la entidad convocada, en la cual se indica que el valor a reconocer por dicho concepto es de \$7'018.719, equivalente al 100% del capital, y \$368.333 por el 75% de la indexación, para un total de \$7'387.052, menos los descuentos de CASUR por \$253.961 y de Sanidad por \$255.617, para un saldo a pagar de \$6'877.474 (fl. 12 "*10.RecursoReposicionSubsidioApelacionCasur.pdf*").

Apreciado el caudal probatorio en forma conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 176 CGP), se concluye que las pruebas recaudadas reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y eficacia, y que el convocante tiene vocación jurídica para acceder al reajuste pretendido con base en el principio de oscilación que opera entre las asignaciones del personal activo y las asignaciones mensuales de retiro, de suerte que habiendo sido reconocida a su favor la asignación mensual de retiro desde el 13 de mayo de 2008 y re-liquidada por parte de la entidad obligada con el incremento anual de las partidas computables que habían permanecido estáticas desde que se hizo efectiva, esto es, el subsidio de alimentación y las doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones, bajo los lineamientos que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional adoptó para solucionar este tipo de litigios, es innegable que la fórmula conciliada bajo examen contiene una obligación clara, expresa y exigible, por lo que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

5.- El acuerdo no debe ser violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público

Si bien la conciliación propugna por la descongestión de la jurisdicción y la composición amigable del conflicto a través de una solución directa convenida por las partes, también es cierto que todo acuerdo de ese linaje debe ser verificado y refrendado por el juez, quien para aprobarlo debe establecer que ese arreglo económico se ajuste a la ley y no menoscabe el erario público.

En efecto, el Decreto 1091 de 1995, por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en su artículo 49 dispuso que quien sea retirado del servicio activo, se le liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas: a) Sueldo básico, b) Prima de retorno a la experiencia, c) Subsidio de Alimentación, d) Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad, e) Una duodécima parte (1/12) de la prima de servicio, y f) Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones.

A su turno, el artículo 56 *ibídem* consagró el principio de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones, según el cual estas se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto.

Por su parte, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 0202 del 13 de mayo de 2008, reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a favor del Intendente Luis Orlando Álvarez Contreras, a partir del 13 de mayo de 2008, en cuantía equivalente al 85% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas previstas en el Decreto 1091 de 1995, cuestión que fue aceptada por la entidad convocada con las certificaciones que expidió para tal efecto, en el sentido de haber incluido como factores computables el subsidio de alimentación y las doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones.

Finalmente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional admitió que esas cuatro partidas computables no fueron reajustadas anualmente, es decir, que fueron pagadas con el valor histórico de la fecha de reconocimiento de la asignación mensual de retiro, esto es, mayo de 2008, por lo que para corregir tal inequidad presentó la fórmula conciliatoria que es objeto de homologación en esta ocasión, la cual es viable acogerla porque a través de tal acuerdo no sólo se aplicaría el principio de oscilación sino que se salvaguardaría el postulado superior que predica el reajuste periódico de las pensiones, y se preservaría la capacidad adquisitiva del pensionado, como lo consagra el artículo 53 de la Carta Magna.

Tampoco se evidencia que sea lesivo para el patrimonio público, si se advierte que en la pre-liquidación se dio aplicación a la prescripción trienal, el actor renunció sólo a una mínima parte de la indexación, a los intereses moratorios y a las costas procesales, y se convino un plazo de seis (6) meses para su pago, contado a partir de la radicación de la cuenta de cobro con los respectivos documentos, circunstancias que permiten colegir que el arreglo es favorable para las partes, pues mientras la convocada evitaría una eventual condena judicial por el reajuste pretendido, más la indexación, los intereses moratorios y las expensas procesales, con el costo de tiempo que implica su trámite, el convocante se beneficiaría también porque se ahorraría los gastos del proceso y no se expondría a que su demanda resulte ilusoria.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la conciliación examinada se adelantó dentro de los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001; que no se observa causal de nulidad que afecte lo actuado o invalide lo acordado; y que el pacto logrado no acusa visos de ilegalidad ni lesiona los intereses económicos de la entidad pública accionada, entonces a la luz de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1716 de 2009 se le impartirá aprobación mediante proveído que tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

Por último, teniendo en cuenta que prosperó el recurso de reposición formulado por la apoderada de la entidad demandada, resulta inocuo conceder el recurso de apelación que interpuso en forma subsidiaria, pues al revocarse el auto que improbió el acuerdo

conciliatorio y, en su lugar, impartírsele aprobación, carecería sin interés jurídico para impugnarlo por resultar finalmente favorable y, por tanto, devendría improcedente la alzada (art. 320, inciso 2, CGP).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio No. 401 del 21 de julio de 2021, mediante el cual se improbió la conciliación extrajudicial de la referencia y, en su lugar,

SEGUNDO: APROBAR la conciliación extrajudicial celebrada entre el convocante, señor Luis Orlando Álvarez Contreras, y la convocada, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el 26 de marzo de 2021, ante la Procuraduría Ochenta y Dos Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá.

TERCERO: CONMINAR a las partes intervinientes a hacer efectivo el arreglo logrado en los términos y plazo estipulados, una vez ejecutoriada esta providencia.

CUARTO: DECLARAR que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1716 de 2009, estas diligencias hacen tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

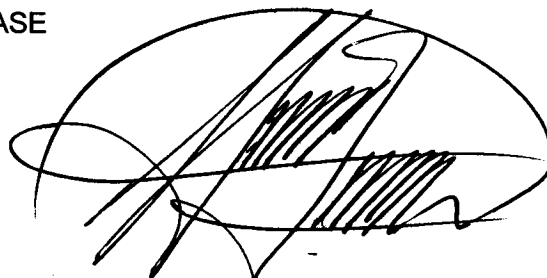
QUINTO: EXPEDIR a la parte convocante copia auténtica del acuerdo conciliatorio y del presente auto, de conformidad con el artículo 114 del Código General del Proceso y en concordancia con el precepto 14 de la Ley 640 de 2001.

SEXTO: ENVIAR copia de este proveído al Procuradora Ochenta y Dos Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá.

SÉPTIMO: NEGAR la concesión del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte convocada, en subsidio del recurso de reposición, contra el auto interlocutorio No. 401 del 21 de julio de 2021, por carencia de interés jurídico para impugnarlo, dado que fue revocado mediante esta providencia y, en su lugar, se aprobó el acuerdo conciliatorio.

OCTAVO: ARCHIVAR las presentes diligencias, una vez cumplido lo anterior y previo registro en el sistema de información Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

MFMP